



PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEEA-PES-060/2021.

DENUNCIANTE: **Dato protegido.*

DENUNCIADO: C. Sergio Augusto López Ramírez, en su carácter de apoderado general del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes.

MAGISTRADA PONENTE: Claudia Eloisa Díaz de León González.

SECRETARIO DE ESTUDIO¹: Néstor Enrique Rivera López.

Aguascalientes, Aguascalientes, a primero de septiembre de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva, que **declara inexistentes** los actos de Violencia Política Contra la Mujer en Razón de Género, derivados de distintos actos atribuidos al C. Sergio Augusto López Ramírez, Apoderado General del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021.

El tres de noviembre de dos mil veinte, dio inicio el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021, para la renovación de los Ayuntamientos y Diputaciones del Estado de Aguascalientes.

Para el Municipio de Aguascalientes, los plazos fueron los siguientes:

- a) *Precampaña: Del dos al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno.*
- b) *Campaña: Del diecinueve de abril al dos de junio de dos mil veintiuno.*
- c) *Veda Electoral: Tres días antes de la Jornada Electoral.*
- d) *Jornada Electoral: El día seis de junio de dos mil veintiuno.*

¹ Encargado de despacho de la Secretaría de Estudio de la Ponencia I, del TEEA.



1.2. Presentación de la denuncia. El primero de junio, la C. **Dato protegido* en su calidad de entonces candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes, presentó denuncia ante el IEE, por presuntos actos de violencia política contra la mujer en razón de género al interior del PVEM.

1.3. Radicación de la denuncia en el IEE. El dos de junio, el Secretario Ejecutivo del IEE recibió la denuncia de mérito, la radicó y admitió bajo el número de expediente IEE/PES/080/2021.

1.4. Protección de datos personales y acuerdo de admisión. En la misma fecha del punto que antecede, el Secretario Ejecutivo del IEE hizo del conocimiento a las partes, que la denunciante ejerció su oposición a cualquier tipo de publicación respecto a sus datos personales. Acto seguido, dictó el acuerdo de admisión, señalando fecha para la celebración de la Audiencia de Pruebas y Alegatos

1.5. Medidas cautelares. El cinco de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE consideró viable adoptar medidas de protección, a efecto de salvaguardar la seguridad de la denunciante y su familia, en relación a posibles actos de represalia por parte del C. Sergio Augusto López Ramírez².

1.6. Integración del expediente IEE/PES/080/2021 y remisión al Tribunal. En fecha cinco de junio, se celebró la Audiencia de Pruebas y Alegatos, y una vez que, el Secretario Ejecutivo consideró debidamente integrado el expediente IEE/PES/080/2021, ordenó remitirlo a este Tribunal, siendo recibido en fecha seis de junio.

1.7. Radicación del expediente TEEA-PES-093/2021 y turno a Ponencia. Mediante Acuerdo de Turno de Presidencia, en fecha seis de junio se ordenó el registro del asunto en el Libro de Gobierno de Procedimientos Especiales Sancionadores, al que correspondió el número de expediente TEEA-PES-060/2021 y se turnó a la Ponencia de la Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González.

1.8. Acuerdo plenario de reposición del procedimiento. En fecha nueve de junio, al no contar con los elementos de análisis suficientes para resolver de fondo las pretensiones de la quejosa, este Tribunal Electoral emitió Acuerdo Plenario de Reposición del Procedimiento, con la finalidad de

² Mediante Resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE, CQD-R-016/2021



que el IEE realizara las diligencias necesarias para allegarse se allegara de mayores elementos de prueba que abonaran a la debida integraci3n del expediente de m3rito.

1.9. Nueva remisi3n del expediente al Tribunal Electoral. Una vez cumplido con lo anterior, en fecha veinticinco de agosto, se recibió en este Tribunal Electoral el expediente identificado con la clave TEEA-PES-060/2021.

1.10. Formulaci3n del Proyecto de Resoluci3n. Verificada la debida integraci3n del expediente, no existiendo trámite alguno o diligencia pendiente por realizar, mediante proveído de fecha primero de septiembre, se ordenó formular el proyecto de resoluci3n y ponerlo a consideraci3n del Pleno, en términos de la fracci3n IV, del artículo 274 del C3digo Electoral.

2. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicci3n y el Pleno tiene competencia para conocer y resolver el presente procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 252, fracci3n II, 268, 274 y 275 del C3digo Electoral del Estado.

3

Lo anterior, en virtud de que la denuncia bajo estudio podría configurar una infracci3n a la normatividad electoral con incidencia en el Proceso Electoral 2020-2021, en especifico por la supuesta comisi3n de violencia pol3tica contra la mujer en raz3n de g3nero³.

Adem3s, lo precisado encuentra sustento en la Jurisprudencia 25/2015, de rubro: **COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCI3N PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.**

Sobre lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci3n⁴, sostiene como v3lido el resolver v3a del procedimiento especial sancionador a las quejas interpuestas durante el curso de un proceso electoral, en las cuales se ponga a conocimiento de la autoridad, adem3s de las hip3tesis que el legislador ha establecido expresamente, aqu3llas donde, de alguna manera, se identifique que la conducta denunciada puede incidir, directa o indirectamente, en los comicios en curso dado su car3cter coercitivo, preventivo y sumario, lo que posibilita restablecer r3pidamente el orden jur3dico trastocado. De ah3 que, este Tribunal es competente para resolver el presente asunto.

³ Violencia pol3tica contra la mujer en raz3n de g3nero, en lo sucesivo VPMG.

⁴ SUP-JDC-9973/2020, SUP-REP-111/2020 y SG-JE-45/2020.



3. PERSONERÍA. A la C. **Dato protegido* en su calidad de entonces candidata a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, se le tiene por reconocida su personalidad tanto en el IEE como en el presente asunto.

Por su parte, el C. Sergio Augusto López Ramírez, tiene personalidad reconocida como apoderado general del PVEM.

4. HECHOS DENUNCIADOS Y DEFENSA.

4.1. Denuncia formulada por la C. **Dato protegido*. La denunciante, en su escrito controvierte hechos que, a su parecer, constituyen actos que actualizan VPMG en su contra, derivado de diversas acciones provenientes del C. Sergio Augusto López Ramírez, apoderado legal del PVEM, y que se sintetizan a continuación:

- Manifiesta, centralmente, que el C. Sergio Augusto López Ramírez dejó de otorgarle los medios económicos necesarios y suficientes para que pudiera ejercer su candidatura a la presidencia municipal de Aguascalientes, que sobrellevar una campaña sin recursos económicos genera también violencia psicológica.
- Que se dirigía a ella de una forma denigrante, y que la denostaba públicamente frente a sus compañeros del PVEM, diciendo que: *“las mujeres no éramos capaces de gobernar porque no estamos capacitadas, además que decía que donde yo pisaba, ya no volvía a crecer el pasto”*.
- Señala que el dirigente del PVEM, siempre se ha referido a la quejosa con palabras ofensivas y altisonantes, pues según refiere, siempre que la buscaba le decía *“me vale verga donde esté, la quiero aquí ya”* y *“usted no es nada ni nadie porque su problema es el ego”*.
- Aunado a lo anterior, manifiesta que el C. Sergio Augusto López Ramírez, se negó a otorgarle la Presidencia del Comité Estatal, cuestión que, a su juicio, desvela el no reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo, ya que dicho nombramiento recayó en la persona del C. Gerardo Misael Girón Montoya, quien solo cuenta con cinco años de pertenencia en el partido y nunca ha sido candidato.



- La actora, señala que el dirigente denunciado, otorgó a su hija la primera posición en la lista de diputaciones por el Principio de RP.
- Finalmente, señala que después de la presentación de esta denuncia ante el IEE, ha recibido amenazas, que se ha presentado afuera de su domicilio, una persona que a su parecer forma parte del personal del C. Sergio Augusto López Ramírez, y según su dicho, la acecha diciéndole que *“le bajara a mi teatro, y que podían pasarle cosas a la suscrita y a mi familia”* (sic), además de que, *“me abrían las puertas del coche y bajaban los vidrios, para que me diera cuenta y asustarme”*.

4.2. **Defensa del denunciado C. Sergio Augusto López Ramírez, PVEM y del C. Gerardo Misael Girón Montoya.** Los denunciados, presentaron escritos de contestación idénticos, manifestando lo siguiente:

- Que, contrario a lo señalado por la denunciante, el C. Sergio Augusto López Ramírez continúa siendo dirigente del PVEM.
- Tanto el denunciado como el PVEM, señalan que a la denunciante, se le brindó apoyo desde el inicio, de su campaña hasta el término de la misma. Además, refiere que la C. ****Dato protegido*** decidió irse del PVEM el día veinticuatro de mayo, sin entablar conversación alguna con el denunciado.
- Alegan que, dentro de la narrativa de los hechos de la denunciante, no se encuentra VPMG, en razón a que la misma ostentó, tanto la candidatura a la presidencia municipal, como la candidatura a la primera posición de representación proporcional en la planilla relativa al Ayuntamiento de Aguascalientes, aunado al hecho de que su suplente en ambas postulaciones es su tía. Además, refiere que el hijo de la denunciante es candidato de representación proporcional en la segunda posición y dos de sus primas hermanas también son candidatas por el PVEM, además de que refiere, impulsó tres de candidaturas a diputaciones locales.
- En ese sentido, manifiesta que, por el contrario, la denunciante omitió tomar en cuenta en su planilla a varios jóvenes que están trabajando de manera activa y en su lugar impulso familiares y amigos. Asimismo, refiere que a la denunciante se le dejó llevar la organización de su candidatura de la manera que ella quiso.



- Finalmente, hace de manifiesto que la denunciante ejerció VPMG en contra de la Dra. Genny Jeaneth López Valenzuela, ya que considera que no tiene ni los méritos ni la capacidad suficiente para poder ser candidata a Diputada.

5. **ALEGATOS.** A fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia planteada, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, asiste a las partes el derecho de formular alegatos, y debe estimarse que este órgano jurisdiccional debe analizarlos al resolver el Procedimiento Especial Sancionador que no ocupa; resulta aplicable la jurisprudencia 29/2012 de rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”.⁵

En ese entendido, de las constancias que obran y del acta de la audiencia de pruebas y alegatos, tenemos que todas las partes comparecieron ratificando en todos y cada uno de sus puntos su escrito inicial de denuncia y contestación.

6

6. MEDIOS DE CONVICCIÓN.

Antes de analizar si los hechos denunciados constituyen VPMG, es necesario verificar su existencia y las circunstancias de su realización, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente.

En atención a ello, las pruebas aportadas en el presente procedimiento se valoran y se concentran en el estudio y análisis de esta sentencia, no obstante, a continuación, se precisan los medios probatorios ofrecidos por las partes y admitidos por la autoridad substanciadora:

6.1. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DENUNCIANTE LA C. *DATO PROTEGIDO.

a. **CONFESIONAL.** Consistente en la fe de hechos levantada ante el Notario Público Número 46 del Estado de Aguascalientes.

⁵ Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 129 y 130.



b. TESTIMONIALES. Consistentes en las manifestaciones ante fedatario público de los CC. Christian Alexander Hernández García, Moisés Cornejo Capetillo, Martha Ximena de León Beloso y Lorena Stephanie Prieto Reyes en la fe de hechos antes citada.

6.2. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIADO.

a. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la constancia que acredita al Lic. Sergio Augusto López Ramírez como dirigente del PVEM.

6.3. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PVEM.

a. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la constancia que acredita al C. Lic. Sergio Augusto López Ramírez como dirigente del PVEM.

6.4. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL C. GERARDO MISAEL GIRÓN MONTOYA.

a. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la constancia que acredita al Lic. Sergio Augusto López Ramírez como dirigente del PVEM.

6.5. PRUEBAS OFRECIDAS POR TODAS LAS PARTES.

a. PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL.

Presuncional. En su doble aspecto, legal y humana, consistente en las deducciones lógico-jurídicas relacionadas con las más recientes consideraciones jurisprudenciales en materia electoral que al efecto sean formuladas por la autoridad resolutora respecto de los hechos expuestos y el caudal probatorio aportado en lo que beneficie al interés de la promovente.

Instrumental de actuaciones. Todas y cada una de las actuaciones y documentos que conformen el expediente en que se actúa con motivo de la denuncia, en todo lo que le beneficie y se acredita en relación a sus dichos.



En relación con las pruebas ofrecidas como técnicas, presuncional legal y humana, e instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano, en concatenación con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 256, tercer párrafo del Código Electoral.

7. HECHOS ACREDITADOS. De una valoración en conjunto de los medios de prueba referidos, analizados por este Tribunal bajo las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, con fundamento en el artículo 310 del Código Electoral, al describirse el total de las pruebas que obran en el expediente, corresponde identificar los hechos que fueron plenamente acreditados.

- **Calidad del denunciante.** La denunciante acude en su calidad de entonces candidata a la Presidencia Municipal de Aguascalientes.
- **Calidad del denunciado.** El C. Sergio Augusto López Ramírez, tiene calidad reconocida como dirigente estatal del del PVEM.

8

8. ESTUDIO DE FONDO.

8.1. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. Del análisis del escrito de denuncia, en el presente procedimiento especial sancionador, la controversia a resolver radica en determinar si los hechos denunciados, configuran, o no, VPMG en contra de la **C. *Dato protegido**.

8.2. METODOLOGÍA. En un primer apartado, se asentará el marco jurídico aplicable a efecto de establecer los parámetros que las autoridades jurisdiccionales deben atender a efecto de juzgar con perspectiva de género, posteriormente se describirán las generalidades en relación a la violencia política en razón de género.

Posteriormente, del análisis de los hechos a la luz de las probanzas valoradas en su conjunto, se determinará si se acredita, o no la infracción denunciada, que de ocurrir lo primero, se procederá a establecer, la responsabilidad y sanción que corresponda.

8.3. MARCO JURÍDICO. Violencia Política contra la Mujer por Razón de Género



Es criterio de la Sala Superior⁶ y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁷, que la impartición de justicia con perspectiva de género resulta de una aproximación de análisis a los casos, de una forma tal, que permite detectar las asimetrías de poder que comprometen el acceso a la justicia, donde se consideran las situaciones de desventaja, de violencia, o de discriminación o vulnerabilidad por razones de género. Esto, ya que es menester que en toda controversia jurisdiccional se garantice el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género y evitando invisibilizar las violaciones alegadas⁸.

Así, el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación, y en específico, en la atención de la violencia contra las mujeres, deben procurarse tanto por las autoridades electorales, como por los partidos políticos en tanto entidades de interés público.

Así, de ellos es exigible un actuar responsable y efectivo, ya que tienen el deber de contribuir a revertir y transformar las relaciones tradicionales de dominación entre hombres y mujeres y la perpetuación de estereotipos que fomenten la discriminación.

Ese mandato se reconoce en los artículos 1º, párrafo 1 y 4º de la Constitución Federal, así como en el artículo 5 y 10 c de la **Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación Contra la Mujer** (CEDAW, por sus siglas en inglés),⁹ así como los artículos 6.b y 8.b de la **Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer**, (Convención Belém do Pará), que obligan al Estado mexicano a tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de género, a fin de eliminar los prejuicios y prácticas basadas en el estereotipo de hombres y mujeres.

El artículo 1º, en el quinto párrafo de la Constitución Federal, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente

⁶ SUP-JDC-383/2016 y el SUP-JDC-18/2017.

⁷ Jurisprudencia 1a./J. 22/2016. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29 de abril de 2016, tomo II, página 836, de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO".

⁸ Tesis P. XX/2015 (10a.). Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 35, de rubro "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA".

⁹ **Artículo 5.** "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: **a)** Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; **b)** Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos".



contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.

Para lograr la efectividad de tal disposición, se exige a todas las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

El artículo 4, párrafo primero, de la Constitución Federal prevé la igualdad legal entre hombres y mujeres; por su parte, los diversos artículos 34 y 35, disponen que los ciudadanos y ciudadanas tendrán el derecho de votar y ser votados en cargos de elección popular, así como formar parte en asuntos políticos del país.

En ese entendimiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁰, ha reconocido la importancia de la perspectiva de género en el acceso de las mujeres a la justicia, partiendo para ello de la interpretación de la **CEDAW** y precisó que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar el marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de **estereotipos** sobre las funciones de uno u otro género.

10

Además, la Segunda Sala ha señalado que los **estereotipos** de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres; de ahí que la perspectiva de género deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de los involucrados, con el fin de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres".

En este sentido, la SCJN ha considerado que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género.

Lo anterior con base en la jurisprudencia¹¹ de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", en la cual se

¹⁰ En adelante, SCJN.

¹¹ Jurisprudencia 1a./J. 2/2016 (10a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 836.



establecieron los pasos que las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir con su obligación de juzgar con perspectiva de género, los cuales son:

- “1. Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las partes de la controversia.*
- 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.*
- 3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas.*
- 4. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género.*
- 5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente los niños y niñas.*
- 6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el cual deberá remplazarse por un lenguaje incluyente.”*

En sincronía, con lo anterior, la CEDAW, en su exposición de motivos, señala que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país.

Asimismo, en su artículo primero precisa que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.



A la vez, el artículo 7 del mismo ordenamiento, refiere que los Estados Partes, tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, y en el derecho: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Ahora bien, la Convención de Belém do Pará, parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana.

En ese sentido, el artículo 1º indica que debe entenderse como violencia cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Además, en su artículo 4 refiere que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, y en su inciso j), señala el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisiones.

En mismo orden de ideas, la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política¹², adopta el concepto amplio de vida pública y política, lo cual significa que la protección se extienda a todas las mujeres que participan en los espacios de la vida pública y a todas las instituciones del Estado, particularmente a los cargos de gobierno, desde el plano internacional al plano local; para asegurar condiciones igualitarias, libres de discriminación y violencia, en el ejercicio de los derechos políticos.

En la misma Ley, se establece que algunas manifestaciones o actos de esta violencia política contra la mujer son:

¹² En lo sucesivo, Ley Modelo

“• *Expresiones que las ofendan en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de dañar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos.*

• *Actos u omisiones que dañen en cualquier forma su campaña electoral y le impidan desarrollar la competencia electoral en condiciones de igualdad.*

• *Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en cualquier propaganda (no necesariamente político-electoral), basadas en estereotipos de género que transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra ellas, con el objetivo de perjudicar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.”*

Entre otros, se reconocen los siguientes tipos de violencia (a través de la cual se ejerce la violencia política contra las mujeres):

• **Violencia psicológica:** *Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, tales como insultos, humillaciones, evaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, control de la autonomía y libertad, amenazas, que conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.*

• **Violencia sexual:** *Cualquier acto que humilla o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.*

• **Violencia simbólica contra las mujeres en política:** *Se caracteriza por ser una violencia invisible, implícita, que busca deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política.*



En concordancia con la Ley Modelo, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres, sirve como guía en nuestra labor jurisdiccional, y tomando en cuenta que la política es un espacio de confrontación, debate, y disenso, porque en ésta se presentan diferentes expresiones ideológicas, resulta que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y competencia fuerte, desinhibida y combativa, y por lo tanto, es una característica constante el que se estereotipe a la mujer.

Los **estereotipos** de género son ideas preconcebidas y generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y las mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales, que tienen como base una sociedad que otorga la creencia que el género/ sexo masculino tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo cual se crea una relación de poder históricamente desigual.

Estos por sí mismos son nocivos, máxime cuando niegan un derecho, imponen una carga, limitan la autonomía de las mujeres, así como la toma de decisiones acerca de sus proyectos de vida.

El protocolo también nos recuerda que la violencia política contra las mujeres, muchas veces, se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Puede consistir en prácticas tan comunes que ni siquiera se cuestionan.

Por otra parte, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres¹³, parte de los Mecanismos de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, establece que la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta gravemente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; además, que la violencia y el acoso político contra las mujeres revisten particular gravedad cuando son perpetrados por autoridades públicas.

En concordancia con lo anterior, el TEPJF, emitió el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en el que determinó que la violencia política por razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

¹³ Disponible en la URL: <http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracion-esp.pdf>



Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.

Además, la Sala Superior en la jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, estableció que, para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, se debía de analizar si las expresiones reúnen los siguientes elementos:

- *Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público.*
- *Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.*
- *Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.*
- *Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y;*
- *Si se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres.*

Es oportuno externar que el pasado trece de abril del dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, marco legal que configura un



nuevo diseño institucional para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y la sanción de este tipo de irregularidades.

Por su parte el Código Electoral Local, fue reformado el pasado 29 de junio de dos mil veinte en materia de VPMG.

Las disposiciones reformadas, en el ámbito de su aplicación esencialmente tienen el siguiente contenido:

- **Sustantiva:** *al prever las conductas que se considerarán como de violencia política en razón de género y, un conjunto de derechos político-electorales a favor de las mujeres. Además, se tipifica el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.*
- **Adjetivas:** *se establece un régimen de distribución de competencias, los procedimientos y mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las mujeres; así como un régimen sancionatorio.*

En esencia, se definió la VPMG, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

De la reforma se destaca que, en la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes:

- *Indemnización de la víctima;*
- *Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;*
- *Disculpa pública, y*



- *Medidas de no repetición.*

En atención con este nuevo marco jurídico, la violencia política en razón de género se sancionará, de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas; los cuales son autónomos.

En consecuencia, conforme a lo anterior, se reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que se tiene la obligación de que, en el análisis de los casos que se plantean, atendiendo a las particularidades y contextos, se debe juzgar con perspectiva de género, a efecto de detectar la existencia de posibles estereotipos discriminadores.

Así, el Alto Tribunal del País ha estimado que la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme a los preceptos fundamentales de orden constitucional y convencional, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tiene las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como pueden ser las consideraciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas.¹⁴

Así mismo, ha definido que juzgar con perspectiva de género, es el deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debían asumir, como un corolario inevitable de su sexo.

¹⁴ Criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P. XX/2015, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA."



9. **CASO CONCRETO.** Es necesario recordar que la materia a analizar en el presente asunto es, si derivado de una serie de actos y manifestaciones presuntamente llevadas a cabo por el C. Sergio Augusto López Ramírez, se configura la infracción relativa a VPMG en contra de la C. ***** , vulnerando así su esfera de derechos **político-electorales**.

Así, tenemos que la denunciante refiere que se ha ejercido violencia política en su contra, señalando medularmente que no le fueron otorgados recursos económicos para hacer frente a su campaña; que, a pesar de su trayectoria en el PVEM, no ha sido tomada en cuenta para obtener la designación como dirigente estatal del PVEM; además, manifiesta que ha sido objeto de denostaciones y expresiones denigrantes por parte del C. Sergio Augusto López Ramírez.

La denunciante, sostiene que ha sido blanco de ofensas por parte del denunciado, el cual, según su dicho y el de sus testigos, se refiere a ella -respecto de su postulación- en los términos siguientes: *“estaba -la denunciante- solo para cumplir una cuota de género”*; *“que las mujeres no éramos capaces de gobernar porque no estamos capacitadas”*; *“que donde yo pisaba, ya no volvía a crecer el pasto”*, expresiones que la actora considera denigrantes y denostadoras de su persona.

Además, refiere que el denunciado le llamaba y le decía: *“Me vale verga donde esté, ¡la quiero aquí ya!”*; *“Usted no es nada ni nadie porque su problema es el ego”*; de esta forma, señala la denunciante que, en diferentes momentos el C. Sergio Augusto López Ramírez, se dirigió tanto a ella, como a otros candidatos, con palabras ofensivas y altisonantes.

Por último, la denunciante expone que tras denunciar públicamente los hechos que narra, una persona que la propia actora reconoce como parte del equipo de trabajo del denunciado, la acechó a las afueras de su domicilio, recibiendo amenazas hacia su persona y familia.

a. No se acredita VPMG en cuanto a la supuesta falta de recursos en su campaña electoral.

Del análisis de los hechos en lo individual, y en su conjunto, y de su confronta con las probanzas que obran en autos, este Tribunal llega a la determinación de que no se actualiza la VPMG en razón de lo siguiente:



La actora, en su escrito de denuncia, refiere que el denunciado, obstaculizó y limitó la entrega de recursos económicos para el desarrollo de su campaña electoral como candidata a la alcaldía de Aguascalientes, situación que considera encuadra en la hipótesis normativa de VPMG.

Al respecto, el denunciado, en su comparecencia expresa que “se le apoyó, -a la candidata-, desde el inicio de su campaña hasta el término”.

En ese sentido, como ya ha sido señalado, este Tribunal asume el deber de juzgar con perspectiva de género, buscando en todo momento evitar la discriminación, la desigualdad y sobre todo el detrimento de los derechos político-electorales de las mujeres por razón de género.

Así, acorde con lo establecido en la **jurisprudencia**¹⁵ de rubro: **“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”**, en la cual se establecieron los pasos que las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir con su obligación de juzgar con perspectiva de género, al analizar las pruebas y los informes que obran en autos, se tiene lo siguiente:

19

La denunciante puntualiza actos tendientes a la limitación de los recursos económicos destinados para su campaña electoral. Ante tal situación, se requirió tanto al PVEM como a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el desglose de gastos asignados y erogados por la denunciante, a efecto de determinar si efectivamente encuentra un sustento la acusación de referencia.

Al respecto, ambas instancias requeridas remitieron a la autoridad instructora la información solicitada.

Al analizar el informe¹⁶ arrojado por el Sistema Integral de Fiscalización del INE, en relación con la candidata denunciante, tenemos que los **recursos asignados a la actora**, fueron erogados en su **totalidad** en la campaña que encabezó, apreciando un desglose por rubros en donde se deja

¹⁵ Jurisprudencia 1a./J. 2/2016 (10a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 836.

¹⁶ Informe visible en fojas del expediente TEEA-PES-060/2021.



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

de manifiesto que, si recibió el dinero para su campaña, contrario a lo que alega en su escrito de denuncia.

Three financial reports from INE (Informe de Campaña) for the 2020-2021 electoral process in Aguascalientes. Each report shows a breakdown of income and expenses by category, with columns for 'DEL PERIODO ANTERIOR', 'DEL PERIODO', and 'TOTAL'. The reports are for different candidates or parties, with handwritten numbers 99 and 100 in the top right corners.

Además, en autos es posible observar la distribución por candidaturas registradas por el PVEM, en donde es visible que la actora, recibió el porcentaje más elevado de apoyo económico a su campaña en comparación con el resto de los candidatos y candidatas del partido, es decir, en promedio 8% más que el resto de los candidatos del partido.



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO
CAMPAÑA 2021

TRANSFERENCIA EN ESPECIE INDIVIDUALIZADA DE CONCENTRADORA A CANDIDATOS																	
MUNICIPIO/ DISTRITO	TEMPLETE (PROPRATEO)	LENAS (INDIVIDUAL)	SI CAMSAS (INDIVIDUAL)	31 KIT SANT (INDIVIDUAL)	GASOLINA (INDIVIDUAL)	19 BOCINAS (INDIVIDUAL)	450 BARRIDOS (INDIVIDUAL)	REDES BOC (PROPRATEO)	31 RINGLES (INDIVIDUAL)	60 VIDEOS (INDIVIDUAL)	LONA APERTURA (PROPRATEO)	GRASAS ES (PROPRATEO)	CUBREBOCAS (PROPRATEO)	COPIAS (PROPRATEO)	EVENTO CIERRE (PROPRATEO)	TOTAL TRANSFERENCIA CONCENTRADOR A	
AGUASCALIENTES	1,315.31	45,796.80	916.40	304.62	50,000.00	2,796.00	25,854.56	71,813.42	2,900.00	-	833.03	377.96	50.00	383.47	-	203,043.57	11.51%
ASIENTOS	69.51	14,616.00	916.40	304.62	12,000.00	-	-	3,795.38	2,900.00	4,756.00	44.02	19.97	50.00	14.98	-	39,486.88	2.24%
CALVILLO	93.32	14,616.00	916.40	304.62	8,000.00	1,599.00	9,001.60	5,095.15	2,900.00	4,756.00	59.10	26.81	50.00	20.11	-	49,839.11	2.83%
COSÍO	38.63	7,795.20	458.20	304.62	8,000.00	1,599.00	2,250.40	2,109.17	2,900.00	-	24.46	11.10	50.00	8.32	13,564.21	86,722.27	4.93%
ELLILANO	38.63	7,795.20	458.20	304.62	8,000.00	1,599.00	2,250.40	2,109.17	2,900.00	4,756.00	24.46	11.10	50.00	8.32	-	30,305.10	1.72%
JESUS MARIA	169.04	20,462.40	916.40	304.62	14,000.00	-	15,752.80	3,439.90	2,900.00	-	107.06	48.57	50.00	36.43	-	63,976.66	3.63%
PABELLON	63.00	19,488.00	916.40	304.62	14,000.00	1,399.00	-	3,925.02	2,900.00	4,756.00	48.15	21.84	50.00	13.57	-	47,388.49	2.69%
SAN JOSE DE G	71.88	7,795.20	458.20	304.62	8,000.00	1,399.00	-	3,925.02	2,900.00	-	45.53	20.63	50.00	15.49	-	48,656.34	2.76%
RINCON	38.63	7,795.20	458.20	304.62	8,000.00	1,599.00	31,505.60	2,109.17	2,900.00	4,756.00	24.46	11.10	50.00	8.32	-	24,985.59	1.42%
TEPEZALA	38.63	7,795.20	458.20	304.62	8,000.00	1,599.00	45,008.00	2,109.17	2,900.00	-	24.46	11.10	50.00	8.32	-	86,597.10	4.94%
DISTRITO 1	74.45	24,350.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	10,351.84	4,065.13	2,900.00	4,756.00	47.53	21.56	50.00	16.04	25,335.78	86,841.80	4.93%
DISTRITO 2	75.06	3,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	31,505.60	3,861.09	5,800.00	-	61.37	27.86	50.00	17.81	-	40,328.60	2.29%
DISTRITO 3	70.71	34,104.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	13,502.40	5,291.29	2,900.00	4,756.00	52.34	23.75	50.00	20.88	-	94,091.76	5.34%
DISTRITO 4	96.91	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,599.00	2,250.40	4,605.89	2,900.00	-	53.42	24.24	50.00	18.18	-	55,270.71	3.14%
DISTRITO 5	82.05	9,744.00	458.20	304.62	16,000.00	1,399.00	4,500.80	4,350.22	2,900.00	4,756.00	50.46	22.89	50.00	17.45	-	44,801.98	2.54%
DISTRITO 6	84.36	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	38,350.51	2.18%
DISTRITO 7	83.71	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	49,821.14	2.82%
DISTRITO 8	80.37	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	48,232.47	2.74%
DISTRITO 9	85.34	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	49,970.36	2.84%
DISTRITO 10	87.50	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	45,285.78	2.57%
DISTRITO 11	81.89	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	47,457.19	2.70%
DISTRITO 12	84.28	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	45,512.55	2.70%
DISTRITO 13	74.75	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	44,865.49	2.55%
DISTRITO 14	79.67	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	50,033.81	2.84%
DISTRITO 15	76.43	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	60,370.02	3.43%
DISTRITO 16	79.57	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	24,805.82	1.41%
DISTRITO 17	81.05	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	1,760,694.10	1.01%
DISTRITO 18	87.46	9,744.00	916.40	304.62	16,000.00	1,399.00	9,001.60	4,388.17	2,900.00	4,756.00	50.90	23.05	50.00	17.32	-	24,805.82	1.41%
DISTRITO FED 1	3,480.00	24,360.00	916.40	304.62	20,000.00	1,399.00	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	49,053.02	2.84%
DISTRITO FED 3	-	9,744.00	458.20	304.62	10,000.00	1,399.00	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	17,452.82	1.01%
TOTAL PAGADO	6,559.86	438,480.00	25,201.00	9,443.22	480,000.00	40,372.00	337,560.00	189,999.84	89,900.00	95,120.00	4,407.86	1,000.00	1,500.00	719.88	39,999.99	1,760,694.10	1.01%
DIFERENCIA	6,560.00	438,480.00	25,201.00	9,443.22	480,000.00	40,372.00	337,560.00	190,000.00	89,900.00	95,120.00	4,408.00	1,000.00	1,500.00	720.00	40,000.00	1,760,694.10	1.01%
	DIF. PROPRATEO			DIF. INMATERIAL				DIF. PROPRATEO			DIF. PROPRATEO	DIF. PROPRATEO		DIF. PROPRATEO	DIF. PROPRATEO		0.01
																	1,720,545.45
																	40,148.66
																	5.79
																	1,760,694.10
																	1,760,694.10
																	DIF. INMATERIAL

Entonces, tras analizar las evidencias que obran en el expediente, este Tribunal advierte la **inexistencia** de VPMG en relación a lo que refiere el artículo 250 A, inciso e) del Código Electoral respecto de la acusación de la limitación de recursos económicos para la campaña electoral de la actora.

Lo anterior, porque contrario a lo manifestado por la actora, se advierte que los recursos que el PVEM destinó para la campaña electoral, fueron erogados precisamente en los actos, acciones, publicidad y demás, que la entonces candidata dispuso para su estrategia publicitaria electoral.

Así, es evidente que, en cuanto a los recursos económicos, no se advierte un trato desigual o limitado hacia la candidata, incluso se observa que su campaña fue la mayormente beneficiada en comparación con el resto de los candidatos de su partido político, es decir, no hubo una candidata diversa que haya obtenido mayor financiamiento por parte del partido, lo anterior, guarda congruencia con el tope de gastos de campaña que se establece para las diversas candidaturas que participan en el PEL, siendo que corresponde precisamente a la Alcaldía de Aguascalientes, un mayor gasto que los demás cargos.



Por tanto, siguiendo la línea establecida en la Jurisprudencia 21/2018, en donde se establece que para que se actualice la VPMG, deben reunirse los elementos en ella contenidos, tenemos que de los hechos narrados y acreditados en el presente Procedimiento, no se advierte que suceda en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales, pues como ya se evidenció, la actora **si recibió y erogó los recursos asignados a su campaña electoral.**

b. No se acredita VPMG en cuanto a la designación de cargos partidistas, o al no reconocimiento de sus méritos.

Del análisis de las manifestaciones y actos que la denunciante acusa actualizan VPMG en su contra, por parte del denunciado, no es posible llegar a la conclusión de que se colman los extremos previstos en la norma para actualizar la infracción, lo anterior ya que no se acredita una afectación al ejercicio de sus derechos político electorales, por las consideraciones que adelante se exponen.

La actora, en su escrito de denuncia, relata que a su consideración y con base a los años de militancia que dice tener en el PVEM, ha solicitado en diversas ocasiones la dirigencia estatal del partido, y no ha sido tomada en cuenta, y que, en cambio, refiere que es ostentada por un tercero que a su juicio tiene menos méritos y carrera dentro del instituto político.

Sostiene que lo anterior tiene como raíz un tema de género, ya que el denunciado, se refiere a ella en los siguientes términos: “estaba solo para cumplir una cuota de género” y “que las mujeres no éramos capaces de gobernar porque no estamos capacitadas”, con lo cual se resalta un menosprecio a su carrera por su condición de mujer, ya que las considera “incapaces para gobernar”.

De lo anterior, se tiene que no se acredita la afectación a sus derechos político electorales, ya que alega su daño partiendo de la premisa de que los nombramientos a los cargos partidistas dependen de la voluntad del denunciado, sin embargo la misma actora reconoce que ostenta un cargo de dirección dentro del PVEM (Presidenta del Comité Municipal), y resalta que lo obtuvo “de conformidad con los procesos internos previstos en la normativa de -su- Partido”, sin señalar cómo es que el denunciado intervino para negarle la posibilidad de obtener la dirigencia estatal.



Por otro lado, obra en autos que la denunciada ostenta un cargo en el Comité Directivo Municipal del PVEM y que fue postulada como candidata a los cargos que refiere, según el proceso de selección interna de su partido, del cual, incluso se ven beneficiados familiares directos de la denunciante, cuestión alegada por el denunciado y que no fue controvertida ni desmentida por la actora.

Así, retomando los elementos establecidos por la jurisprudencia, este órgano jurisdiccional estima que no se acredita la infracción denunciada, toda vez que no se cumple con la totalidad de los elementos que precisa la jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO como se muestra a continuación, y tampoco la citada conducta encuadra en lo establecido en el artículo 250 A del Código Electoral y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

I. Por la persona que presuntamente lo realiza. Este elemento se actualiza, pues la responsabilidad se atribuye al C. Sergio Augusto López Ramírez, dirigente Estatal del PVEM.

II. Por el contexto en el que se realiza. Este elemento se colma, dado que la quejosa fue candidata registrada, haciendo valer su derecho de votar y ser votada en la vertiente de acceso al cargo y porque la denuncia gravita en torno al ejercicio de derechos político electorales, ya que alega vulneraciones a su esfera de derechos político electorales en su vertiente de constituir o formar parte de órganos partidistas.

III. Por la intención de la conducta. Para determinar si una conducta se basó en elementos de género, se requiere el análisis de un elemento subjetivo, es decir la intención de la persona emisora del mensaje o acto, para establecer si esta se encontraba relacionada con la condición de mujer de la denunciante o no, lo cual no ocurre como se lee a continuación.

La intención, constituye un hecho interno y subjetivo de la persona emisora del mensaje. En ese sentido, es necesario partir de hechos objetivos o externos, entendiendo por tales, los acontecimientos producidos en la realidad sensible con la intervención humana (hechos externos humanos) o sin ella (hechos externos naturales).



Los hechos objetivos sirven como base para acreditar mediante inferencias los hechos internos, los cuales denotan los motivos, intenciones o finalidad de una conducta o el conocimiento de un hecho por parte de alguien.

Es así como, el análisis integral de las conductas denunciadas es el referente para demostrar los hechos internos; es decir, que la presunta intención de menoscabar o anular el reconocimiento goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, se basó en elementos de género.

Al respecto, la denunciante manifiesta que, se actualiza la VPMG, al haber sido obstaculizada para ocupar el cargo de dirigente estatal, teniendo en consideración la antigüedad que ostenta dentro del PVEM.

Así, en principio debe mencionarse que para este Tribunal es prioritario evitar y contribuir a la eliminación de estereotipos de género que afecten, menoscaben o limiten el desarrollo de las mujeres en los cargos públicos y en el desarrollo de los derechos político-electorales. Sin embargo, sobre el particular, esta autoridad considera que no se está en presencia de éstos.

Esto es así, porque del análisis integral de las constancias del expediente, y de las manifestaciones propias de la actora, se advierte que contrario a lo señalado no existen actos que estén relacionados con la condición de mujer de la denunciante, ni se le coloca en una posición que busque atribuirle estereotipos de género en su perjuicio.

Incluso, la propia actora refiere que el cargo que ostenta dentro del PVEM fue asignado conforme a lo establecido en su normativa interna, así como los procesos de selección de candidaturas, por lo que no se advierte que se haya obstaculizado de manera alguna el acceso a sus derechos político-electorales.

Asimismo, tampoco es posible advertir una sentencia favorable a la promovente, en el que este Tribunal o instancia intrapartidista, se haya pronunciado respecto de los procesos internos de selección de candidatos del PVEM, por lo que se infiere que la designación de las candidaturas fue acorde a sus lineamientos y autodeterminación.



Así, no se advierte la existencia de VPMG en cuanto a el ejercicio de sus derechos político-electorales en la vida intrapartidista de la actora.

c. No se acredita VPMG en cuanto a las expresiones denunciadas, analizadas contextualmente, en lo individual y en su conjunto.

La actora, denuncia en su escrito diversas expresiones presuntamente realizadas por el denunciado, pretendiendo sostener su dicho con un acta notarial que contiene el testimonio de diversos ciudadanos y ciudadanas.

Para puntualizar, es necesario retomar las frases que considera violentas en su contra:

- *(La actora) “estaba solo para cumplir una cuota de género”;*
- *“que las mujeres no éramos capaces de gobernar porque no estamos capacitadas”;*
- *“que donde yo pisaba, ya no volvía a crecer el pasto”;*
- *“Me vale verga donde esté, ¡la quiero aquí ya!”;*
- *“Usted no es nada ni nadie por qué su problema es el ego”;*

Como ya se apuntó, la impartición de justicia con perspectiva de género consiste en una aproximación de análisis de los casos, buscando en todo momento promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

En ese entendimiento, la Segunda Sala de la SCJN, ha establecido que los **estereotipos** de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres; de ahí que la perspectiva de género deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de los involucrados, con el fin de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres" .

En el caso, siguiendo los criterios internacionales, es importante analizar si las manifestaciones denunciadas contienen expresiones discriminatorias en contra de la mujer, en donde se denote distinción, exclusión, se menoscaben o se anulen los derechos de las mujeres.



Entonces, tenemos que las frases denunciadas en principio se dan en un plano oculto, es decir, la actora refiere que en las formas de comunicación entabladas con el denunciado, este se expresó de la manera referida, por tanto, no son expresiones que se hayan dado a la luz pública, por lo que, en aras de velar por la perspectiva de género, se parte de la lógica en donde la actora es la víctima de las palabras que considera son motivo de VPMG.

Bajo ese entendimiento, tenemos que al expresar:

- *(La actora) “estaba solo para cumplir una cuota de género”;*
- *“que las mujeres no éramos capaces de gobernar porque no estamos capacitadas”;*
- *“que donde yo pisaba, ya no volvía a crecer el pasto”;*

Sin duda nos encontramos ante manifestaciones que no son en favor de la candidata, sino que por sí mismas son expresiones agresivas, denostadoras, y que violentan a la actora en su condición de mujer.

Además, las frases:

- *“Me vale verga donde esté, ¡la quiero aquí ya!”;*
- *“Usted no es nada ni nadie porque su problema es el ego”;*

Si bien, no son expresiones que por sí solas, se refieran a la mujer por su condición de mujer, si son frases por demás agresivas, ya que denotan un menosprecio a las actividades, agendas, ocupaciones o circunstancias que el receptor o receptora del mensaje esté haciendo, pretendiendo así un sometimiento ante quien emite el mensaje.

Ahora bien, la actora, para acreditar sus denuncias, ofrece como medio probatorio una documental pública, consistente en un testimonio notarial en el que diversas personas acudieron ante el fedatario público.

En ese sentido, como ya se ha sostenido por este Tribunal, las actas notariales, si bien por su naturaleza tienen un valor probatorio pleno en cuanto a los hechos asentados, estas, también son sujetas a análisis a efecto de adminicular con otros elementos probatorios la veracidad de los hechos.



En ese entendimiento, además, la Jurisprudencia 11/2002 de rubro ***“PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS”***, establece que las pruebas testimoniales solo generarán un indicio en tanto no sean administradas con otras probanzas que sean plenas en cuanto a los actos denunciados.

Así, al analizar el testimonio ofrecido se advierten discrepancias en relación con lo denunciado, pues en el acta se asienta lo siguiente:

- *“Usted quien chingaos se cree que es, sabe que usted porque nunca va ser nadie y no es nadie porque tiene un problema de ego, se siente tan chingona que todavía se atrevió a meter al parasito de su hijo en la planilla en la que usted ni el van a lograr nada”*.
- *“Que él no permitiría que los enanos crecieran”*, en razón a que su candidatura según refiere, fue para cuidar cuota de género.
- De manera general, se señala que el denunciado fue escuchado en las instalaciones del PVEM, expresándose de una manera denigrante, grosera y vulgar en contra de la ahora quejosa.
- Además, hacen el señalamiento que la denunciante tenía los méritos suficientes para ostentar el cargo de dirigente estatal del PVEM, pero que no contaba con el apoyo del C. Sergio Augusto López Ramírez.

Por lo anterior, si bien en algunas partes se advierte relación con lo denunciado, la prueba ofrecida tiene un carácter indiciario en tanto no sean constatadas con otros elementos probatorios.

Bajo ese entendimiento, tenemos que la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política establece diversos tipos de violencia como lo son:

- ***Violencia psicológica:*** *Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, tales como insultos, humillaciones, evaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, control de la autonomía y libertad, amenazas, que conllevan a la víctima a la*

depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

•**Violencia sexual:** *Cualquier acto que humilla o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.*

•**Violencia simbólica contra las mujeres en política:** *Se caracteriza por ser una violencia invisible, implícita, que busca deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política.*

Violencia verbal: *Todo ataque que realicen a través de palabras ofensivas, insultos, calificativos, palabras que impliquen un doble sentido, comentarios sarcásticos, burlas o insinuaciones que expongan públicamente a las mujeres políticas, con el fin de impedir el ejercicio de sus derechos políticos y, finalmente;*

Así, teniendo como base las frases en relación con lo dispuesto en la Ley Modelo, este Tribunal considera que no se acredita VPMG por las siguientes razones:

Por la persona que presuntamente lo realiza. Este elemento se actualiza, pues la responsabilidad se atribuye al C. Sergio Augusto López Ramírez, dirigente Estatal del PVEM.

Por el contexto en el que se realiza. Este elemento se colma, dado que la quejosa fue candidata registrada, haciendo valer su derecho de votar y ser votada en la vertiente de acceso al cargo y porque la denuncia gravita en torno al ejercicio de derechos político electorales, ya que alega vulneraciones a su esfera de derechos político electorales en su vertiente de constituir o formar parte de órganos partidistas.

Por la intención de la conducta. Para determinar si una conducta se basó en elementos de género, se requiere el análisis de un elemento subjetivo, es decir la intención de la persona



emisora del mensaje o acto, para establecer si esta se encontraba relacionada con la condición de mujer de la denunciante o no, lo cual no ocurre como se lee a continuación.

La intención, constituye un hecho interno y subjetivo de la persona emisora del mensaje. En ese sentido, es necesario partir de hechos objetivos o externos, entendiendo por tales, los acontecimientos producidos en la realidad sensible con la intervención humana (hechos externos humanos) o sin ella (hechos externos naturales).

Los hechos objetivos sirven como base para acreditar mediante inferencias los hechos internos, los cuales denotan los motivos, intenciones o finalidad de una conducta o el conocimiento de un hecho por parte de alguien.

Es así como, el análisis integral de las conductas denunciadas es el referente para demostrar los hechos internos; es decir, que la presunta intención de menoscabar o anular el reconocimiento goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, se basó en elementos de género.

29

Al respecto, la denunciante manifiesta que, se actualiza la VPMG por que las frases en su conjunto, amén de ser violentas, han provocado la obstaculización del goce de su derecho a ser votada.

Para este Tribunal, es prioritario evitar y contribuir a la eliminación de estereotipos de género que afecten, menoscaben o limiten el desarrollo de las mujeres en los cargos públicos y en el desarrollo de los derechos político-electorales. Sin embargo, sobre el particular, esta autoridad considera que no se está en presencia de éstos.

Ello es así, porque si bien, las frases denunciadas encajan perfectamente en la definición de **violencia psicológica y violencia verbal**, lo cierto es que del análisis integral de las constancias del expediente, se advierte que contrario a lo señalado por la denunciante, no se desprende que dichas manifestaciones o actos estén relacionados con la condición de mujer de la denunciante, incluso, al considerar las manifestaciones propias de la actora y de las personas que comparecieron ante el notario, es posible que la forma de actuar del denunciado no sea un trato particular en contra de la actora, pues en diferentes ocasiones refiere la actora que



es un trato que han recibido también otros candidatos, por lo que no se le coloca en una posición que busque atribuirle estereotipos de género en su perjuicio.

Así, tomando en cuenta el contexto en el cual se emitieron, son insuficientes para acreditar que estamos en presencia de VPMG, ya que no se advierte que tengan como finalidad impedir el ejercicio de los derechos políticos de la denunciante, ni que estén basadas en estereotipos de género que le nieguen la capacidad para ejercer algún cargo en particular.

Por el resultado perseguido. En el caso concreto, no se acredita el objeto o resultado, en lo que respecta a menoscabar o anular los derechos político-electorales de la denunciante, porque como ya se mencionó no obstante lo violento de los comentarios, incluso los orientados a su condición de mujer, no se observa de qué modo trascendieron al ejercicio o acceso a algún cargo en particular, o que tuvieran como finalidad impedir a la actora el ejercicio de los derechos políticos de la denunciante desde una perspectiva de género, tomando en cuenta que fue postulada tanto a la candidatura a la alcaldía como a la regiduría RP en primera posición, así como el puesto partidista que ocupa.

Además, las conversaciones, pláticas, o comunicación que denuncia, de su análisis individual, en conjunto y en su contexto, no es posible obtener estén encaminadas a obstaculizar sus derechos político electorales, pues como ya se precisó, la actora en todo momento ha gozado de sus derechos, ejerciéndolos como a sus intereses ha convenido, siendo asignada con un cargo de dirección en el comité municipal de su partido; seleccionada como candidata a la alcaldía de la capital; candidata a regidora por el principio de RP; y empleando los recursos asignados a su campaña comicial.

En consecuencia, una vez analizados los elementos de la jurisprudencia 21/2018, esta autoridad concluye que no se está ante un hecho constitutivo de VPMG, por lo tanto, la conducta resulta inexistente, pues del análisis de cada frase en lo individual y en su conjunto, si bien nos encontramos ante frases por demás agresivas y violentas, esta se trata de violencia psicológica, no así de VPMG puesto que como ya ha sido precisado, su esfera de derechos político-electorales ha sido intocada, pues se ha desempeñado y desarrolló su campaña sin obstáculo alguno por razón de género.



10. RESOLUTIVOS.

ÚNICO. Se declara la **inexistencia** de los hechos que presuntamente configuran la infracción denunciada.

NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, por **unanimidad** de votos de las Magistradas y Magistrado que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

CLAUDIA ELOISA DÍAZ DE LEÓN GONZÁLEZ

MAGISTRADA

LAURA HORTENSIA
LLAMAS HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

HÉCTOR SALVADOR
HERNÁNDEZ GALLEGOS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JESÚS OCIEL BAENA SUCEDO